

Los incentivos propuestos por gerentes o jefes de servicio tienen mayor impacto sobre el funcionamiento asistencial que los planteados por las administraciones, según expertos

Redacción

En una jornada organizada para analizar los incentivos al personal sanitario se ha puesto de manifiesto que cuando los objetivos son puramente economicistas pueden llegar a desmotivar al profesional

Madrid (22-5-08).- Analizar las posibles consecuencias éticas de las políticas de incentivación en el ámbito sanitario ha sido el tema central de un encuentro entre expertos, en el que se ha puesto de manifiesto que aquellas que parten de las gerencias o de los jefes de servicio “tienen mucha más significación” y, por ello, “mayor impacto sobre el funcionamiento diario de los servicios”. Así lo ha explicado uno de los ponentes, el Prof. Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, entidad organizadora del evento.

“Incentivar a los profesionales sanitarios sobre la base del ahorro de recursos es perverso y puede llegar a desmotivarles”, ha apuntado. A este respecto, y en su opinión, “deberían consensuarse unos objetivos claros que no sólo tengan un carácter puramente economicista, sino que pongan en consideración el buen manejo de los pacientes por parte de médicos y enfermeros”.

Gracia ha comentado que los incentivos que parten de los servicios regionales de salud suelen establecer criterios “más genéricos” y, por lo tanto, en ocasiones, “más alejados de la realidad”.

Por su parte, el Prof. Francesc Borrell, vocal del Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, ha señalado que “los incentivos no son ni buenos ni malos por sí mismos, sino que todo depende del uso que se les dé”. Se pusieron en marcha para solventar un grave problema de justicia: tratar de manera diferente al profesional que se esfuerza del que no lo hace. “Su impacto en la actualidad es importante; en general, en sentido positivo, pero en ocasiones, también en sentido negativo”.

En este sentido, el experto opina que “los criterios para su distribución deben ser conocidos por la sociedad en su conjunto, en tanto en cuanto la sanidad es uno de los servicios que más directamente incide en la población”. Así, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso social, “deberían eliminarse aquellos criterios que la población rechace”.

Según el Prof. Borrell, “estos incentivos, en general, no superan el diez por ciento de los ingresos anuales de un profesional, aunque empiezan a ser significativos cuando representan del dos al tres por ciento”. Estas cifras “eran ridículas hace seis años y ni siquiera estaba asegurado su cobro”, ha afirmado.

Médico Interactivo